



El gobernador de Arica y Parinacota, la zona con la mayor tasa de homicidios del país, dice que “todavía no tenemos Seremi de Seguridad Pública titular, y toda esta ausencia del Estado ha hecho que las bandas utilicen Arica para poder dirigir, controlar y fortalecer el crimen organizado en Chile”.

Luciano Jiménez

Con 35 años el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani (RN), es una de las autoridades regionales más jóvenes del momento. De origen aymara, ingeniero comercial (de la Universidad Andrés Bello), bombero (llegó a ser tesorero de la Tercera Compañía de Arica) y emprendedor (tiene una distribuidora), fue consejero regional entre 2018 y 2020 y candidato a diputado por el distrito 1 en las últimas elecciones parlamentarias (2021).

Electo gobernador con el 54% de los votos (73.379 sufragios, 12 mil más que el DC Jorge Díaz), los temas de seguridad fueron uno de los ejes de su campaña. No podía ser de otra forma: la región —según explica— está asolada por los delitos fronterizos y homicidios.

De hecho, Arica y Parinacota es la región con la mayor tasa de homicidios en Chile, lo que ha generado una arremetida del jefe regional contra el Gobierno. En reuniones con el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Seguridad, Luis Cordero, Paco Mamani ha enfatizado la necesidad de demoler casas y desalojar los terrenos tomados ilegalmente en el sector de Cerro Chuño —en la periferia nororiente de Arica—, barriada que tuvo su origen a principios de los 90 con la construcción de viviendas sociales frente a un terreno que había sido un vertedero de residuos tóxicos (plomo y arsénico). Según el gobernador, ese lugar —donde cerca de la mitad de sus habitantes son migrantes— se ha convertido en un “territorio impune” para las bandas criminales de la región.

—Arica tiene 9,9 homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿A qué lo atribuye?

—Son datos brutales respecto a lo que es el descontrol fronterizo. Somos por tercer año consecutivo (2022, 2023 y 2024) la región número uno. ¿A qué se atribuye? Principalmente a la ausencia del Estado, a una debilidad respecto a lo que pasa en Cerro Chuño. Es una verdadera fortaleza del crimen organizado, realmente es el Sinaloa de Chile. En Arica hay zonas que se parecen a una de las áreas más violentas



Diego Paco Mamani:

“Hay zonas de Arica que son como Sinaloa”



de América Latina.

—¿Cómo se llegó a esa situación?

—El año 2012 se desalojan a todas las familias de ese sector por una contaminación por polimetales. Ese año tenían que empezar las demoliciones de las viviendas, pero se presentó un recurso de protección; las mismas autoridades que hoy día gobiernan, los mismos abogados de la delegación presidencial presentaron esa acción judicial. Eso hizo que las demoliciones sólo se retomaran a partir de 2017. Entre ese año y 2021 se demolieron 162 casas, pero todavía quedan 705 viviendas por demoler. Eso se ha convertido en un verdadero territorio para el crimen organizado: allí se cobran arriendos, se venden terrenos y se usufructúan las tierras del Estado.

“Para este Gobierno migrar es un derecho”

—Usted ha sido crítico del Gobierno por este tema.

—En Instagram el Presidente Boric mencionó que se han recuperado más de tres hectáreas de terrenos en ese lugar. ¿Pero recuperar qué? Eso sigue siendo parte del crimen organizado, hoy es tierra de nadie. Ahí se recaudan dineros ilegales para seguir robando vehículos, porque también tenemos la tasa de robo de vehículos más alta de Chile. Somos la región con la mayor tasa de robos en lugares habitados; es complicada la situación. La ausencia y la debilidad del Estado lo único que ha hecho es acrecentar el patrimonio ilegal de estas bandas. Un terreno en el sector de Cerro Chuño se arrienda entre \$100 mil y \$200 mil. Si tú haces un cálculo por los 12 meses, el arriendo de las 705 casas de esa zona entrega unos \$1.000 millones anuales al crimen organizado que los ocupa para comprar armamento, contratar delincuentes, robar vehículos, etc. La percepción de inseguridad en Arica, el miedo, es principalmente por la inacción del Estado.

—¿Cómo han sido las conversaciones con el Gobierno?

—Todo esto que cuento se lo mencioné al Presidente hace un mes. Posteriormente también se lo comenté al ministro de Seguridad, Luis Cordero. Lo único que le pedí era desalojar y demoler Cerro Chuño, que de nuestra parte no iba a tener ni una traba, sino más bien todo lo contrario. Y si hay que poner fondos regionales, estamos totalmente disponibles para aquello. Dijeron que estaban al tanto de los problemas, que hay una planificación, que están avanzando, que están esperando una licitación. Pero mientras no vea una maquinaria demoler Cerro Chuño, no lo voy a creer.

—Cuando usted habla de un “abandono del Estado”, ¿se refiere a una situación que se ha extendido por varios gobiernos o sólo a lo sucedido en esta administración?

—Entre el 2018 y 2021, en el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hubo una voluntad y una acción concreta

de demoler; los datos así lo indican. ¿Cómo este Gobierno va a tomar una acción?, si los mismos abogados que hoy día están en la delegación presidencial presentaron en 2012 un recurso de protección para evitar las demoliciones. Veo al Gobierno bastante complicado por una ideología y un pensamiento que lo único que hace es proteger la migración irregular, justificarla y no tomar una sola acción en concreto para detener sus efectos nocivos.

—¿Lo atribuye a un tema ideológico?

—Absolutamente. Si para este Gobierno migrar es un derecho, para ellos la migración irregular no es un delito, a lo más una infracción administrativa. El Ejecutivo no ha presentado ninguna ley para fortalecer y endurecer las sanciones contra todos aquellos que utilizan espacios irregulares o clandestinos para entrar al país. Esa es la visión que tiene este Gobierno, y todo el país paga las consecuencias. Esa inacción ha generado que Cerro Chuño sea el verdadero Sinaloa de Chile. La ausencia del Estado no solamente está dañando psicológica y mentalmente a las personas que viven en esta región, no solamente está dañando la parte económica, la parte turística, está generando una herida que podría ser irreparable. Arica y Parinacota ha sido postergada durante muchas décadas, no puede ser que nos sigan dejando a un lado. Lo único que se volvió costumbre en este Gobierno fue la criminalidad en Cerro Chuño.

“No vamos a aceptar que se cierren las fronteras”

—Queda poco para el fin del Gobierno. ¿Es posible aún desalojar Cerro Chuño?

—A este Gobierno le queda poco menos de un año y tuvo tres años para prepararse. Y se puede; en 2017 se demolieron 86 casas, el 2020 fueron 38, y el 2021 fueron 48. El Gobierno, con la sola decisión del Presidente de la República, puede iniciar las demoliciones. Lo único que se ha hecho hasta el momento es desalojar y, entre comillas, limpiar terrenos fiscales que no son las casas que se debieron haber demolido, son otras tomas que se pusieron alrededor y eso, si bien ayuda, no contribuye a resolver el problema de fondo.

—¿Qué posible solución habitacional se le puede dar a la gente que vive ahí? Se habla que esa zona tiene cerca de mil habitantes.

—El Gobierno tuvo tres años para avanzar en la solución y empezar de a poco, pero hoy evidentemente la erradicación es complicada hacerla. Acá se requiere una coordinación interinstitucional con apoyo del municipio y el gobierno regional, para poder buscar una solución en concreto. Lo que no puede seguir pasando es que las bandas criminales sigan lucrando con las casas y terrenos de Cerro Chuño, generando crimen y delincuencia. Esto es principalmente responsabilidad del Gobierno.

—¿Qué tipo de crímenes existen

hoy en Cerro Chuño?

—Todo lo que te puedas imaginar y más. Hace poco se encontró a una persona muerta al interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento. Según se ha afirmado dicha persona habría sido un integrante de la banda Los Gallegos, una especie de célula del Tren de Aragua que opera en esta zona. Ya se han encontrado a cuatro personas enterradas allí. ¿Por qué en Cerro Chuño? Porque los delincuentes se sienten confiados. Se han encontrado cuerpos mutilados, otros calcinados. El lugar da para todo, desde arriendo de botillerías clandestinas, prostíbulos clandestinos, hasta quema de cables para robar el cobre y comercializarlo. Cuando digo que realmente Cerro Chuño es el Sinaloa de Chile, no estoy exagerando. En esta región todavía no tenemos Seremi de Seguridad Pública titular, tenemos una interina que tiene dos funciones y no da abasto. Toda esta ausencia del Estado ha hecho que las bandas utilicen Arica y Cerro Chuño para poder dirigir, controlar y fortalecer el crimen organizado en Chile.

—¿Atribuye las altas cifras de homicidios a los inmigrantes? Cerca de la mitad de los habitantes de Cerro Chuño, por ejemplo, vienen de otros países.

—Efectivamente toda esta inseguridad se ha dado por el descontrol migratorio. Hay 336.000 migrantes irregulares en Chile, el triple más de lo que existía hace solo dos años. La exministra del Interior, Carolina Tohá, hoy candidata presidencial, reconoció que hay más de 28 mil casos de inmigrantes irregulares con órdenes de expulsión en donde no se sabe en qué lugar están. Hoy con más fuerza hace sentido fortalecer las zonas fronterizas. Sé que soy repetitivo, pero es la verdad; en nuestra región hay que fortalecer la presencia del Estado. Mire, tenemos una comuna que se llama General Lagos, donde hoy, en pleno siglo XXI, no hay energía eléctrica.

—¿Cómo evalúa el plan de control fronterizo del Gobierno? Tanto las autoridades de Interior como del Servicio Nacional de Migraciones, han señalado que se ha regularizado la situación de las fronteras.

—Hay muchas propuestas, mucho discurso, pero ninguna ha funcionado. Y eso lo vemos en los indicadores, en la tasa de homicidios y robos. Yo lo que puedo decir es que por ningún motivo vamos a aceptar que se cierren las fronteras en el norte del país. Esa no es la solución. La solución es fortalecer los complejos fronterizos, la solución es tener más presencia con personal de las policías y de las Fuerzas Armadas, dotar de mayor tecnología para tener reconocimiento facial y todas aquellas estrategias que fortalezcan la data. Pero cerrar fronteras a costa de Arica, bajo ningún punto de vista. No lo vamos a permitir. A costa de la ineficiencia de no resguardar los pasos no habilitados, son los ariqueños y parinacotenses los afectados, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia económica.



“Veo al Gobierno bastante complicado por una ideología y un pensamiento que lo único que hace es proteger la migración irregular, justificarla y no tomar una sola acción en concreto para detener sus efectos nocivos”.



“La solución es fortalecer los complejos fronterizos, tener más presencia con personal de las policías y de las FF.AA. Pero cerrar fronteras a costa de Arica, bajo ningún punto de vista”.